
Evaluación, burocracia y torres de marfil

Óscar Calavia Sáez

Un programa de doctorado de cierta universidad española ha empezado a exigir, a quien aspira a defender su tesis, que presente previamente un conjunto de «indicios de calidad»: artículos publicados en revistas de excelencia, participaciones en congresos, etc. Es sólo un ejemplo de una tendencia más general, que en otros casos prescinde de la propia tesis y la sustituye por lo que en este caso son sólo «indicios». Nada de extraño a primera vista, porque la publicación en revistas de excelencia viene a ser, hoy en día, el epítome de la calidad, la superación y la competición en el medio académico.

Pero con un poco de reposo, la idea sugiere algunas dudas. Una tesis de doctorado es el primer trabajo independiente y de cierta entidad que un investigador emprende. ¿Cómo cabe esperar que, al menos un año antes de concluirlo –porque el proceso de publicación es moroso– su autor esté en condiciones de ofrecer resultados sustantivos a una «revista de excelencia»? No se trata

de una exigencia elitista destinada a seleccionar superdotados: se integra, más bien, en una tendencia a la generalización de esos grados de estudio superior. Pero ¿qué «indicios» necesitaría un tribunal que tiene ante los ojos el objeto íntegro que debe juzgar, la tesis? Por la pluralidad de examinadores –que deberían dominar en conjunto todos los campos del saber implicados en cada caso–, por su carácter público y por la interacción entre tribunal y candidato, se supone que una defensa de tesis es de lejos, o debería ser, el modo más confiable y exhaustivo –muy costoso, es verdad– de evaluar la calidad de una investigación.

No finjamos ignorancia. Los nuevos requisitos no apuntan a un mayor nivel de exigencia en las prácticas de la Universidad, sino a una revisión integral de sus principios. Que en buena medida se basa en la desconfianza hacia la capacidad que la institución tiene para juzgar sus propias producciones. Se sospecha que los procesos tradicionales adolecen de un subjetivismo –rayano en la prevaricación– y de que faltan criterios objetivos a los que puedan sujetarse.

Producción

Durante los dos últimos siglos, la universidad ha estado llevando a cabo, con medios bastante escuetos –un tribunal, una comisión, un asesor o dos– todas esas actividades en que la evaluación se hacía necesaria. Para dar acceso a puestos, o a puestos más elevados, para aprobar o rechazar tesis, artículos o teorías. Lo ha hecho con una exactitud y una honestidad muy variables, que necesitan los filtros complementarios de la distancia y el tiempo: una camarilla puede imponer el fraude, el plagio o la componenda, pero no lo conseguirá fuera de sus dominios ni durante mucho tiempo. Con esos matices, los medios tradicionales de evaluación han sido capa-

ces, *grosso modo*, de filtrar eso que consideramos como saber adquirido. La idea de que están, en conjunto, errados o son insuficientes ha surgido en los dos, o a lo sumo los tres últimos decenios, y ha contribuido a que se buscase un sistema de evaluación objetivo y externo, o para ser más exactos desobjetivado y externalizado. En primer lugar, eso exige número. Las figuras estadísticas pasan por ser más objetivas que las interpretaciones individuales, pero necesitan grandes cifras, y para llegar a grandes cifras, en ese mundo lento y moroso de la ciencia, hace falta incrementar la productividad, de todas las maneras posibles.

Una de ellas es reclasificar como producción toda y cualquier cosa. Un científico de hace un siglo, resumiendo su obra, recordaría a lo sumo una o dos docenas de libros y artículos donde se recogieron los resultados finales de su trabajo. No creo que incluyese la dirección de sus estudiantes, los congresos en los que participó, los tribunales de tesis en que tomó parte, o las asesorías que prestó a un gobierno o un tribunal. Ahora, todas esas actividades cuentan como producción: producción de valor menor, sí, pero producción al cabo, y que tiene la virtud de mover el contador más rápido. Eso anima a los competidores, pero sobre todo anima a los gestores, cuya sed de grandes números es bien conocida. No puede sorprender que incentiven una tendencia inflacionaria que al cabo resta espacio para actividades más densas. El mejor ejemplo son los congresos, multiplicados hasta convertirse en uno de los pilares de la industria turística en baja estación, que sirven sobre todo para emitir ponencias –y para registrar debidamente ese producto– y cada vez menos para escucharlas. Ni para debatirlas: reunir grupos afines que entonan como un coro los mismos postulados es un éxito de *networking* que permite multiplicar resultados. Los estudiantes de posgrado son primero incentivados, más tarde obligados como vimos al principio, a convertir en productos de ese tipo tesis aún no concluidas. Un director de investigación que empuje a

sus estudiantes a que investiguen más a fondo los tornará, probablemente, agentes improductivos que no accederán a becas ni puestos; ni siquiera a la defensa de su tesis, que cada vez más es supeditada a las publicaciones que puede exhibir su autor. Quien se preocupa por su futuro hará bien en prodigarse desde el primer momento, y eso quiere decir desde un momento en el que aún no tiene, en realidad, nada que decir.

Otra vía importante es la fragmentación de la producción. Como la densidad de un texto es difícilmente cuantificable, es más sensato dividir lo que se publica en muchas unidades de escaso contenido, una práctica que no es nueva pero que el nuevo sistema va tornando forzosa. Con el fin de evitar la repetición –el autoplagio, una nueva categoría– las revistas empiezan a aplicar *softwares* que detectan argumentos o bibliografías tomados de textos ya publicados por el mismo autor. Por supuesto no sirven para detectar el excipiente de relleno que sirve para completar un artículo con un sólo párrafo de verdadero interés. Si el autor sabe lonchear finamente su trabajo, conseguirá que una visión más completa de sus argumentos emerja sólo de la recomposición de numerosas publicaciones. El resultado es penoso para un hipotético lector, pero eso no importa mucho: como veremos más tarde, la divulgación ha dejado de ser una prioridad.

Otra, en fin, es la maximización del lucro por la tercerización, que atiende por los pseudónimos de iniciación científica y trabajo en equipo. La autoría múltiple se impone, tanto si la investigación es efectivamente hecha por un equipo –donde cada componente responde por una parte de la tarea– como si es un trabajo individual realizado en el seno de una red. En ese caso, la autoría múltiple acaba siendo el tributo que el autor paga por el apoyo institucional, la orientación intelectual o la simple lectura de un ensayo. Quien escribe firma lo que ha escrito, quienes organizan la red firman todo lo que han escrito todos. Eso está de acuerdo con

un tipo de organización del trabajo que se impone cada vez más, en que el autor material de un producto o de un servicio entrega la mayor parte de su retribución a una cohorte creciente de intermediarios. Pero ¿qué otra cosa podría ofrecerse a científicos sénior a los que se deja claro que el trabajo de gestión (que rebasa con mucho las tareas empresariales del científico sénior de hace unas décadas) representa la cumbre, o el sumidero, de su carrera intelectual?

Un aparte. Todo lo que acaba de decirse afecta a todas las ciencias, pero mucho más a las ciencias humanas, que en las horas bajas suelen quejarse de que los sistemas de evaluación están cortados a la medida de las *hard-sciences*: es allí donde la producción científica suele ser resultado de un trabajo efectivo en equipo, y puede exponerse en artículos de dos o tres páginas. Culpa suya: en la disputa entre ciencias y letras, las diferencias epistemológicas han ocupado la escena mientras en los bastidores se desarrollaba una vasta operación de epistemímesis –llamemos así al intento de alcanzar a las ciencias exactas copiando sus adornos. Sólo los más científicistas de los letrados llegaron en su momento a vestir las batas blancas de los médicos o los químicos, pero ni los más posmodernos renuncian a la retórica de laboratorios, instrumentos de investigación, impactos y productos, ni se resisten a llamar «herramientas conceptuales» a las palabras que usan. Jergas muy espesas se multiplican como sucedáneo del lenguaje matemático que no se domina –y del latín que se dejó atrás. Ese camuflaje parece dar resultado a la hora de negociar presupuestos, pero es una pesada hipoteca cada vez que hay que enfrentarse a protocolos y criterios pensados para actividades muy diferentes. A la misma palabra «ciencia», tan latina y tan letrada –pero tan mal vista en las facultades de humanas–, le pasa algo parecido: es algo así como una corbata que se anuda para hablar con las altas instancias, aunque de vuelta a casa parezca una prenda presuntuosa y casi obscena.

Evaluación

Una vez multiplicada la producción, resta la ingente tarea de procesarla, introduciendo todos sus datos en plataformas que recopilan millones de datos y que resultan intratables para buena parte de sus usuarios. No hay de qué extrañarse: los académicos pueden estar más o menos avezados en su uso, pero tienen que ser especialistas en otras cosas. Y los especialistas en plataformas, los técnicos de la administración, tienen otras tareas de qué ocuparse: especialmente la de poner a punto constantemente nuevas versiones.

Por mucho que los deteste, el universitario medio respeta esas ingenierías: ¿cómo sería posible, sin ellas, tratar ese cúmulo de datos? Eso está fuera del alcance de cualquier comisión o cualquier evaluador individual. Verdad es que la historia –según es posible recordarla aún hoy– ha sucedido en sentido contrario: ha sido la introducción de las plataformas la que ha exigido, para justificarlas, llevar a esas dimensiones portentosas lo que previamente se presentaba en una escala mucho más tratable.

Es difícil cuantificar –debería hacerse alguna vez– el tiempo que se invierte en la multiplicación de actividades y en su registro. He conocido situaciones en que no menos de cuatro personas –entre profesores, administrativos y becarios– dedicaban cuatro meses del año a hacer el inventario de las actividades anuales de un departamento modesto, en una plataforma cuyo único destino explícito es el de repetir a cada año un *ranking* sin sorpresas. Porque, conviene decirlo, ese tratamiento estadístico de datos masivos raramente arroja resultados diferentes al del mero examen de una breve selección de las mejores producciones.

Hace algo más de diez años, siendo profesor y coordinador de un programa de doctorado en Brasil, recibí –como muchos otros colegas que se ocupaban de la gestión de un posgrado– una curiosa instrucción llegada de uno de los más altos órganos del Ministerio.

Yo acababa de completar, en la plataforma correspondiente, el informe anual para evaluación de actividades, que había requerido meses de trabajo. Pero para que la evaluación pudiese realizarse, debía adjuntar también un resumen, un breve compendio en un simple archivo de texto, como los que se hacían a finales del siglo XX usando el ordenador como una simple máquina de escribir. La base de datos de la plataforma es muy poco manejable, me dijeron cuando me quejé.

¿Brasil? No, mi ejemplo no habla de los fallos de una burocracia retardataria en un país emergente. Con un sistema de posgrado de enormes dimensiones y gestión centralizada, Brasil llevaba por entonces tal vez una década de adelanto sobre los procesos que en Europa están todavía en vías de implantación, de modo que esa experiencia, más que del pasado que perdura en algún tercer mundo, habla de un futuro próximo para todos.

Aunque no sea eficiente para lo que se propone, el sistema de evaluación lo es en modificar el ambiente, y no en el mejor sentido. Como bien se sabe en el mundo académico, la escasez no es un índice seguro de calidad; pero la profusión sí suele serlo de su contrario. La productividad produce sobre todo ruido. Textos de relleno que compiten en igualdad de condiciones con los mejores o comparten con ellos, pacientemente, una larga fila para la publicación o para la lectura. Un investigador que quiera adentrarse en un tema perderá mucho tiempo con infinitas repeticiones de lo mismo. El productivismo académico tiene poco que ver en sí con un efectivo incremento del saber; existe en función de la evaluación, que ha pasado de ser un auxiliar a ser un principio estructurante. Sería, a pesar de todo, un criterio válido si los sujetos estuviesen ajenos al proceso y absortos en la producción de ciencia. Pero no: están absortos en la producción de productividad, y eso lleva a la estadística a su peor avatar, ese en que en lugar de poner números a lo relevante, otorga relevancia a la primera cosa que se pueda contar.

Publish or perish

El centro y la cúspide de ese sistema de evaluación está en la publicación científica en revistas de alto nivel: un solo artículo publicado en una de ellas puede valer más que todo el resto de las actividades de un año. Las más conocidas tienen décadas, a veces más de un siglo de existencia, y fueron fundadas –y mantenidas durante mucho tiempo– en el seno de sociedades científicas, institutos oficiales, universidades. Esa aristocracia tradicional puede dar, sin embargo, una idea equivocada del sector: en los últimos tiempos, y al calor de la creciente demanda, han aparecido numerosas publicaciones periódicas que, en muchos casos, les presentan una feroz competencia. Creadas ya en plena era digital y en plena cultura de la evaluación, tienen una configuración adaptada al nuevo ambiente. Las viejas estrellas del mundo de la publicación presentan a menudo problemas de continuidad o de gestión en un medio académico afectado por las reformas neoliberales: sus métodos se han vuelto obsoletos, poco profesionales. En algunos casos han sido compradas por la iniciativa privada, o, sobre todo, se han asociado a grandes conglomerados que ocupan, en el mundo de la ciencia, el mismo papel que las distribuidoras en el mundo de los libros: son intermediarios que dominan el campo con una inversión mínima. Empresas que exigen altas tasas por publicar un artículo y/o por leerlo, invocando unos derechos de propiedad intelectual de los que son titulares muy dudosos, pues no pagan a los autores ni a las instituciones que los financiaron, como tampoco pagan a la mayor parte de los agentes que colaboran en el proceso de publicación.

Llamar «sistema de publicación» a ese complejo es una sinécdoque: sea cual sea su valor como vehículo –que puede variar mucho de una especialidad científica a otra–, su carácter esencial es el de un registro notarial de la propiedad, combinado con el de

una bolsa de valores. Publicar equivale a tornarse propietario de un valor, cuya cifra depende del valor del vehículo en que aparece. Otrora ese valor era indicado por el prestigio y la antigüedad de la revista y por algunos otros factores como la presencia de un consejo editorial lleno de nombres ilustres, la regularidad y la demanda de publicación (número de artículos recibidos y rechazados, fechas de recepción, aceptación y publicación), etc. Pero en los últimos años ese vago gradiente ha sido sustituido por índices estadísticos detallados.

El más conocido es el Journal Citation Reports, en siglas JCR, que era publicado por la agencia Thomson&Reuters, hasta que en el 2016 un grupo de inversores compró esa y otras líneas de trabajo de la agencia para dar lugar a Clarivate Analytics, una empresa especializada, sobre todo, en propiedad intelectual y patentes. Se añade, así, un nuevo peldaño al proyecto de hacer de la evaluación un proceso objetivo, externo, y tercerizado; y un nuevo intermediario obtiene grandes lucros de enredar el trabajo hecho por otros. El JCR hace una cuidadosa contabilidad de impacto en un universo de miles de revistas (existe un gran JCR para ciencias *hard* y otro menor para las *soft*), o en otros términos del número de citas que cada texto obtiene en las publicaciones incluidas en ese universo. El número total de citas obtenidas por los artículos de una revista, dividido por el número de artículos publicados, define su índice de impacto, en una jerarquía de cuatro cuartiles. Las empresas dueñas del JCR han sido muy eficaces vendiendo su producto a universidades, instituciones de fomento a la investigación y ministerios, y con eso han dado a las revistas un objetivo estratégico (entrar en el universo JCR y trepar cuartil arriba), y un sentido a la vida de los académicos: publicar en una revista JCR. El momento cumbre de su actividad científica es ese, en que después de cumplimentar largos formularios y anexar sus textos, aprieta una tecla virtual con nombre ominoso: *submission*.

Por supuesto, esa sed de publicación ha traído problemas. Se habla mucho, por ejemplo, de la aparición de revistas «predadoras», que previo pago y sin grandes controles de calidad, aseguran al autor una publicación rápida, una difusión ilimitada y (al menos potencialmente) bien cotizada, y que de ese modo estarían deteriorando la calidad del sistema. Todos los potenciales lectores de este texto reciben en sus buzones de correo electrónico decenas de propuestas de ese tipo. Cohibir esa práctica es una intención que tropieza en un obstáculo simple: los principios de funcionamiento de esas revistas «predadoras» son los principios del sistema, y así discriminar entre revistas predadoras y revistas punteras se hace imposible sin recurrir a los criterios subjetivos que se acaban de proscribir. ¿Qué criterio objetivo las diferencia? ¿Su carácter venal? Pero casi todas las grandes revistas cobran por publicar en ellas... ¿Su celeridad? Bien, sería paradójico que en un sistema tan contemporáneo la morosidad pasase a ser criterio de calidad. Las listas negras de publicaciones predadoras recurren al tipo de juicios ampliamente subjetivos que el sistema, supuestamente, desprecia. No siempre de la mejor especie: a una revista nueva o con sede en un país periférico se le reprochan pecados que pasarían desapercibidos en otros casos. Los ejecutores del JCR detectaron hace dos o tres años prácticas de cártel –creo que no se usó esa palabra– entre las revistas, que empezaban a seleccionar sólo artículos con citas abundantes de otros artículos publicados por su mismo grupo. Según se dice, pusieron en marcha algunos criterios complementarios destinados a corregir esos desvíos.

Pero será difícil que la estadística corrija lo que no son sino estrategias de adaptación a la estadística. Los propios autores saben que citar es el camino, o al menos una condición, para ser citado, y poco a poco la amplitud de las bibliografías desafía la capacidad humana de leer y asimilar. La cita deja de ser una condición de verificación de lo que se escribe para convertirse en su

estrella polar, la que indica cuál es el camino más poblado de citas por el que se puede ir de cualquier premisa a cualquier consecuencia. Eso da a los textos de un inequívoco sabor escolástico, envejecido, pero al mismo tiempo muy actual. Ese aire de familia que aproxima los índices de impacto a las redes sociales, con sus botones de «me gusta» y su contabilidad de seguidores y suscriptores, no tiene nada de casual, y a su manera parece aproximar la evaluación de la ciencia al ideal de la democracia digital: el valor científico es, al cabo, una cuestión de sufragio.

Epistemología

El agigantamiento de la burocracia académica no es un accidente, sino un capítulo importante (y lamentable) en la historia de la epistemología. Hagamos un poco de historia. No hay que retroceder tanto en el tiempo para llegar a la época en que las letras (divinas y humanas) detentaban esos criterios de valor. Una hegemonía ficticia: si existía era porque la Universidad no pasaba de ser un apéndice ilustre de la Iglesia, que empleaba a sus miembros como definidores y calificadores. Después, y a lo largo del siglo XIX, las ciencias –la biología, la química, la física– entraron en la Universidad, la dominaron, y conquistaron el papel de definidoras y calificadoras. Una parte importante de la filosofía se convirtió en filosofía de la ciencia, una reflexión que se desarrolló en diversos campos: el del lenguaje de la ciencia (véase el Círculo de Viena), el de la normativa epistemológica (Popper a un lado, Feyerabend al otro), el del análisis de la práctica científica (Lakatos, Kuhn, Bloor, etc). No es difícil describir toda esa filosofía de la ciencia con una alegoría política al estilo de Bruno Latour: un proyecto de dotar al mundo académico (a la ciencia) de una Constitución y de un derecho constitucional, que se hacían necesarios una vez derrocado el

antiguo régimen de la teología. La ciencia no sólo había heredado su poder, sino que lo había incrementado en una ascensión que aparentemente no tenía límites, y que podía llevarla a convertirse en una nueva religión sostenida por dogmas, fe ciega y rituales. En la época dorada del positivismo ya parecía muy próxima a eso, y los filósofos no lo deseaban. La ciencia debía ser un poder reflexivo, fiel a los principios que le habían llevado al poder. Junto a debates ontológicos –las cuestiones científicas ¿se sitúan en la realidad o en el lenguaje?–, y a exámenes críticos de la práctica científica (una jurisprudencia, o un derecho consuetudinario), los constituyentes, especialmente el doctor Karl Popper, llegaron a formular un esbozo de legalidad, una posible ortodoxia que, aunque centrada en la teoría científica y en el ejemplo supremo de la física, parecía capaz de adaptarse a labores menos ambiciosas, de proporcionar a los científicos un mínimo común denominador que atravesase incluso los umbrales entre lo *hard* y lo *soft*. La refutabilidad, por ejemplo, es un principio muy económico que afecta a todos los momentos de cualquier proyecto científico: a la elaboración de un objeto de investigación, al modo en que esa investigación expone sus fundamentos y sus pruebas, a una ética elemental de la profesión. Por mucho que se aleje de los procedimientos efectivos de la investigación científica, por mucha complejidad que deje a un lado, no deja de ser una guía muy razonable para determinar su valor.

Pero la Constitución ha fracasado. No, tal vez, en hallar un consenso sobre lo que es científicamente válido, pero sí en hacer que ese consenso se reconozca. Puertas adentro, lo que sorprende en el medio científico es, precisamente, que el consenso sea mucho más asequible de lo que se supone. No es tan difícil, delante de una tesis por ejemplo, ponerse de acuerdo en si resulta inteligible, consistente y nueva; en si da cuenta del estado de la cuestión o pretende inventar la rueda; en si aporta o no la documentación o las

pruebas de lo que propone. Todos esos atributos de un trabajo científicamente válido no son fáciles de reunir, pero son simples; están al alcance de la vista y de la argumentación. No es difícil distinguir entre teorías ya obsoletas, teorías en vigor y teorías innovadoras a las que aún falta desarrollo o verificación; entre hipótesis contradictorias e hipótesis complementarias; entre disputas sobre una teoría o sobre los derechos de propiedad de esa teoría, y, en fin, entre lo que es ciencia y lo que es otro tipo, tal vez valioso, de discurso o de conocimiento.

Lo que no se reconoce es que ese consenso pacífico pueda valer como principio en los momentos de controversia. Los científicos son ciudadanos como todos los demás, no siempre dispuestos a sujetarse a la regla que acaban de inventar. Si la disputa se agudiza, parece posible recurrir a todo y cualquier truco anticonstitucional, de las consignas de un positivismo raso a los sofismas posmodernos pasando por el argumento *ad hominem*. Pero ese rechazo de los buenos modos legales ha acabado por convencer a los de afuera de que en el mundo de la ciencia no hay criterios ni parámetros comunes, de que (como lamentaba ya Descartes en su momento) los sabios no están de acuerdo sobre nada. Es más que hora de sustituirlos por máquinas.

Vuelta al sujeto

Sin embargo, la máquina de contabilidad del complejo publicación/evaluación funciona como aquellos autómatas falsos de otros tiempos, dentro de los cuales un enano se ocupaba de mover los resortes: porque entre el autor y la publicación siguen mediando siempre evaluadores individuales, agentes lamentablemente subjetivos.

Reclutar a esos evaluadores no es simple. No pueden componer una plantilla fija, para garantizar su independencia y porque

tienen que ser especialistas en los temas de que trata cada artículo. Son difíciles de reclutar, porque en general no ganan un céntimo con esa actividad y porque a su vez están demasiado ocupados en introducir datos en alguna plataforma; de modo que convencerles de que evalúen, y de que lo hagan en tiempo hábil, es la tarea más difícil de los gestores de cualquier revista que pretenda conseguir o mantener su JCR. Existen ya plataformas como Publons, que ofrecen a sus usuarios no sólo un rastreo de sus publicaciones y del impacto que obtienen, sino también un registro y una certificación de sus actividades como evaluadores: un medio óptimo, por supuesto, para poder vender a las revistas un catálogo clasificado y cualificado de posibles evaluadores. Pero mientras ese ramo del negocio paraacadémico no haya sido suficientemente desarrollado, no hay cómo sorprenderse de que, obviando las dificultades del proceso, y haciendo caso omiso de las objeciones que las convirtieron en sistema externo de evaluación, las revistas soliciten los nombres de los posibles evaluadores... al propio autor.

Estamos, así, de vuelta al mismo punto del que se salió huyendo: al mismo conjunto de personas de cuya capacidad para juzgar se había dudado. ¿Será que todo ese proceso de masificación y objetivación lo ha depurado, lo ha tornado imparcial y riguroso? No es probable: se trata de los mismos individuos empíricos, con los mismos intereses y los mismos humores: en rigor, el anonimato multitudinario del sistema puede dejarlos más libres, si quieren, para dar rienda suelta a sus peores instintos. Los criterios de evaluación que el evaluador pone en juego son, en principio, los clásicos, pero poco a poco se le va pidiendo que los encaje en una pauta predefinida. En el ambiente competitivo de la academia, los autores empiezan a recurrir a vías judiciales para contestar evaluaciones negativas, y ante un juez es deseable contar con argumentos objetivos: no puede descartarse que, un día u otro, el evaluador deba asumir un modo de operar análogo al del JCR.

¿Qué ha sido del público?

Todo ese sistema fundado en una especie de sufragio podría parecer muy ciudadano, si no fuese porque el sistema muestra un marcado desprecio hacia el público. La ciencia, de hecho, parece haber renunciado a él. Antes de su entrada en la Universidad, las ciencias naturales tenían en el público su fuente de legitimación, y los experimentos eran, no pocas veces, planeados como un espectáculo. La teoría darwiniana vio la luz en debates públicos que han pasado a la historia. Hace tiempo que eso ya no es así, y quizás no haya tanto que lamentar en las ciencias naturales y exactas, que no carecen de buenos divulgadores –autores o museos– y además han encontrado otro tipo de receptores: la industria, los servicios médicos, etc. Pero el cambio tiene un cariz escandaloso en las ciencias humanas, cuyo destinatario principal, o quizás único, debería ser la ciudadanía en general. En los sistemas de evaluación, la divulgación es desastrosamente infravalorada, sea como capacidad sea como actividad. Como actividad, ya sabemos que los libros representan méritos muy por debajo de los artículos JCR –esencialmente inaccesibles, estos, incluso para esa fracción de la ciudadanía que es el público lector. No hablemos de otras actividades de divulgación, ni del ínfimo papel que éstas tienen a la hora de seleccionar, por ejemplo, docentes.

Si hablamos de la capacidad de divulgación, el panorama es peor. El cambio de estilo literario que se observa de los clásicos de las ciencias humanas a sus manifestaciones actuales no es un mero accidente, ni una exigencia de ciencias que se han vuelto más complejas. Historiadores, sociólogos o antropólogos de hace un siglo escribían para el público –un público culto, quizás, pero un público– y de vez en cuando alcanzaban grandes ventas o premios literarios, como ocurrió con Frazer o Malinowski por un lado, con Freud o Lévi-Strauss por el otro. Marx escribió panfletos y mani-

fiestos muy accesibles por motivos obvios; pero quien considere que *El Capital* es de difícil lectura, haría bien en compararlo con trabajos actuales de máster que traten de *El Capital*. La obesidad creciente del mundo universitario ha creado un público cautivo especializado donde abundan dos tipos de lectores amantes del esoterismo. Uno, el de los que sufren de una paradójica pereza para captar el sentido de un texto demasiado inteligible, no jalonado por las llamadas de atención de la jerga. Otro, el de los que encuentran en esa jerga una guía para saber que están en terreno amigo, el de su secta particular. Para sus creadores, la jerga académica tiene otro valor determinante: a diferencia del lenguaje común, es un objeto adecuado para la apropiación intelectual. Todo neologismo es un patrimonio adquirido, una fuente de citas, un combustible para el impacto.

El del idioma es otro aspecto importante de ese abandono del público. El inglés, como vehículo de comunicación universal, multiplica la difusión virtual de cualquier texto en un nivel global, pero reduce su difusión efectiva en un nivel local. Las publicaciones con JCR son en su abrumadora mayoría publicaciones en inglés. Publicar en inglés, por mucha dificultad que añada al trabajo de los científicos no anglohablantes, es una garantía de llegar a una comunidad especializada global, y no hay cómo quejarse de ello sin caer en jeremiadas localistas, que no creo que tengan mucha audiencia en las Facultades de Física, Biología o Farmacia. Otra cosa se da en las ciencias humanas, que, aparentemente, no se han dignado a discutir qué parte de su actividad debe destinarse a una comunidad especializada global, y qué parte a un público geográficamente más restringido y demográficamente mucho más amplio: habitantes de una nación, hablantes de una lengua, agentes o afectados de un modo inmediato por todos esos fenómenos de que tratan las ciencias humanas y sociales. Historiadores, filólogos o antropólogos, claro está, siguen publicando abundantemente en

sus lenguas originales; pero poco a poco eso se va tornando una rémora para sus carreras, que rendirían mucho más si se limitasen a escribir en la lengua global. ¿Para qué comunidad global de especialistas? ¿Para la de los colegas? Esa demanda existe, pero es muy pequeña: las grandes teorías unificadas son de escasa utilidad en esas ciencias, y los académicos suelen ser políglotas que cuando se interesan mucho en algún asunto distante prefieren informarse en la lengua en que ocurren. ¿Para una congregación de sabios que gobierna el mundo? No se tienen noticias de ella, y las que aspiran a tanto –organismos internacionales, por ejemplo– ya encargan estudios *ad hoc* que confirmen sus acciones. De debates más profundos sólo se ocupan si estos ya han tomado impulso localmente, algo a lo que la publicación en inglés ciertamente no contribuirá. De modo que, tratándose de asuntos que son o deberían ser objetos de debate público, o contribuir a un patrimonio cultural localizado, el ideal de la publicación en inglés acaba siendo una vía hacia el tipo más superfluo de elitismo.

Burocracia

A principios de este siglo, el candidato a la acreditación de un sexenio de investigación debía presentar, ante la comisión correspondiente, su *currículum* y una breve selección de sus principales producciones. Hoy en día, ese trámite exige cumplimentar el formulario de una plataforma digital con todas sus actividades, divididas en sectores y caracterizadas mediante un cúmulo de datos sobre todas y cada una de ellas, de la más considerable a la más nimia, e incluyendo por supuesto esos nuevos datos que son los índices de impacto.

Si del proceso relativamente simple de un sexenio se pasa al de la obtención de una cátedra, el panorama se complica. A los proce-

sos en vigencia anteriormente se ha sumado un intrincado proceso de habilitación que la mayor parte de los aspirantes delegan en profesionales. En torno a las universidades florece un nuevo sector privado (y generalmente informal) de servicios especializados en cumplimentar esas densas selvas de formularios.

El universitario no tiene cómo quejarse de agravio comparativo: sufre, quizás más que otros, de una inflación burocrática que acosa a todo ciudadano, y de la que una parcela creciente de ellos también vive. Hace poco menos de un cuarto de siglo, era común pensar que la alianza de neoliberalismo e informática iba a exterminar en poco tiempo la especie de los burócratas, identificada con la intervención estatal y con la minuciosa rutina de los despachos. Será difícil encontrar, en la historia de las profecías, alguna más fallida. A una burocracia pública hipertrofiada se ha sumado una burocracia privada que aparentemente no prevé límites: no es fácil comprar una tostadora sin antes contribuir generosamente a la base de datos del establecimiento, que para pedirlos esgrime todos los motivos nobles de la burocracia en general: información que permite un mejor servicio, prevención de tropelías, medidas de seguridad. La ciudadanía lo sobrelleva con disgusto, como sobrelleva los catarros persistentes o el mal tiempo, pero sin entender que ese sea un problema digno de debate, como el paro o el terrorismo; la burocracia está ahí, quizás para prevenirnos de esos males peores: si quien se queja de ella es otro, más aún alguien dedicado a asuntos tan evanescentes como los que ventilan en la Universidad, puede ser que lo haga simplemente porque es flojo e inepto.

Que eso no es así se comprueba con una sencilla búsqueda en Internet sobre las peripecias recientes de los mejores centros científicos del país. Véanse, por ejemplo, el Instituto Español de Oceanografía, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, el Centro Nacional de Investigaciones

Cardiovasculares o el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, todos ellos del más alto nivel, dedicados a tareas cuya utilidad no ofrece dudas para nadie, y perpetuamente al borde del colapso. En todos ellos se repiten los mismos agravios: más que por cualquier restricción de presupuestos, se ven ahogados por una burocracia que impide usar no sólo el dinero público destinado a la investigación, sino también el que esos mismos centros han obtenido de fuentes privadas o internacionales. Se leen frases que cualquier universitario podría identificar con su experiencia cotidiana: «...he tenido problemas hasta para poder comprar sillas, porque los proyectos no indican explícitamente que necesitemos el concepto sillas»; «...la burocratización es tremenda y hace que todo se ralentice. Si un pedido de material llegaba antes en dos semanas, ahora llega en tres meses» –me permito añadir «a un precio muy superior».

Los científicos, por supuesto, se quejan de un formato legal «inadecuado para las necesidades concretas de la investigación» pero ese es un modo comprensible de minimizar las resistencias y buscarse un camino mediante excepciones. Pero lo que están denunciando no es una inadecuación puntual, es el mismo sistema con el que se tropieza constantemente en cada actividad universitaria, incluya mucho, poco o ningún dinero. El tiempo dedicado a la administración por profesores y becarios puede superar el que se dedica a sus actividades típicas, y faltan estimativas del coste, probablemente colosal, de un sistema de control que, de un modo subrepticio, parece haber invertido el famoso *onus* de la prueba: a cada paso se está obligado a presentar pruebas de que no se está robando ni prevaricando.

¿Una vigilancia molesta pero necesaria? Así opinan muchos. Que sea necesaria presupone, sin embargo, que sea eficiente. En privado, cualquiera admite que desviar dinero hacia actividades imaginarias sería mucho más fácil de lo que es utilizarlo regular-

mente en actividades reales, y la razón es muy simple: una ficción se adapta a un conjunto de normas rígidas mucho mejor que la realidad. Pero pasando de lo hipotético y privado a lo público y notorio, basta recordar los repetidos escándalos con títulos universitarios fraudulentos, que han abundado en el caso de los másteres, un grado de estudios creado recientemente con los más avanzados métodos de gestión. Y estos, al cabo, no parecen muy capaces de detectar lo que cualquier director de investigación debería saber: si el estudiante ha escrito o no ha escrito su tesis.

O sea, parece evidente que las componendas y las prevaricaciones abundan en la Universidad, y que conviven en paz, si no en simbiosis, con la metástasis burocrática, tan costosa como ineficaz. Si eso no se toma en cuenta, a no ser para hacerla crecer aún más, es porque confirmar la premisa es mucho más importante que alterar las consecuencias.

La premisa –nunca explícita– es que la Universidad es una institución dirigida por y para burócratas: no hace tanto tiempo era aún entendida como un conjunto de universitarios, docentes y discentes –era ese su significado medieval original. Ahora, cualquiera la identifica con una estructura administrativa.

El reflejo

¿Y qué tiene eso de malo? Es lo que corresponde, si el objetivo de la Universidad es la emisión controlada de títulos: consagrar, como ya lo hacía en el antiguo régimen, licenciados y doctores que podrán añadir ese título de honra a su nombre civil. Sólo insinuarlo parece ofensivo, porque la Universidad actual, como se nos dice, es un lugar de innovación científica y actividad crítica, y una institución abierta en una sociedad abierta.

La abertura parece indudable: el número de estudiantes y titulados universitarios en el mundo ha crecido enormemente, y ello no es resultado sólo del crecimiento demográfico y del aumento de la expectativa de vida. Además de eso, hay toda una serie de medidas destinadas a ampliar –en el límite, universalizar como tiempo atrás se universalizó la alfabetización– los estudios universitarios, o a integrar en ellos a sectores que nunca tuvieron acceso a ellos.

Ese debería ser un proceso jubiloso: una sociedad más amplia y abierta necesita una Universidad más amplia y abierta, y el potencial de estudiantes venidos de sus extremos menos favorecidos es un tesoro que no puede perderse –la universidad, de hecho, siempre fue un medio de ascenso para segundones o para clases medias. Pero lo que se ha hecho con esa ampliación alardeada por los gestores ha sido algo muy diferente: abusando del oxímoron, una popularización del elitismo.

La abertura de la Universidad es una abertura unidireccional: no sirve para que la Universidad salga a la calle. Ya hemos visto que la divulgación o la habilidad para difundir ideas son atributos de muy escaso valor en los sistemas de evaluación, y por ende en la Universidad. Contribuir a la mejora de los niveles previos de enseñanza no forma parte, tampoco, de sus ideales: salir de la Universidad hacia la enseñanza media o básica es señal inequívoca de un desempeño mediocre –y no hay nada en el ambiente que contribuya a cambiar esa percepción en un futuro próximo.

Las puertas abiertas no sirven para salir; luego deben servir sólo para entrar. Así es inevitable un crecimiento vertical, donde sobre las licenciaturas se acumulan másteres y doctorados y posdoctorados que poco a poco configuran una cúspide tan ancha como su base. Se pretendía demoler las torres de marfil y lo que se ha hecho ha sido añadirles bloques y pisos.

La elevación es engañosa, inflacionaria: la creación de escalones superiores se da a costa de aplanar los que les preceden. Pero

se gana –o se pierde– tiempo. Las universidades tienen hoy en día algo de esa función que tenían los conventos en el *ancien régime*: sacar de circulación a una parte de la población que no tiene plaza adecuada en el orden económico vigente. Una reclusión, en este caso, mucho más porosa, pero que no deja de ser ardua porque, como otrora, a buena parte de los enclaustrados les falta la vocación. La carrera universitaria impone ciertos niveles de ascetismo, y de interés por una actividad muy poco espontánea en la que, digan lo que digan las más diversas escuelas de autoayuda, se necesita un esfuerzo penoso. Son legión los estudiantes que se lamentan amargamente de perder los mejores años de su vida en una actividad sin sentido, y no tan pocos –pero a nadie se le ocurrirá hacer esta estadística– los que, con mucha persistencia, consigan concluir un doctorado sin dejar por ello de ser analfabetos funcionales. Los consultorios de fisioterapeutas y psicoterapeutas, especializados en dolencias causadas por la elaboración de tesis, pululan en los alrededores de las facultades. Los docentes se fatigan en vano delante de audiencias que están en las aulas por elección, pero se comportan como si se hubiesen visto obligados a ello. Si los resultados no son los mejores, algún burócrata receta el elixir infalible: uso de nuevas tecnologías que consigan captar la atención y despertar el entusiasmo. ¿Por qué están ahí, o más bien por qué hay un empeño en que permanezcan ahí? No será por exigencias del mercado, que siempre que tiene ocasión propone otros medios más baratos de producir su mano de obra.

No hay ningún misterio: si los estudiantes quieren entrar y continuar, si se oponen decididamente a reformas de los estudios universitarios, si sus familias les apoyan, y si la hipertrofia universitaria es una causa popular que ni los partidos más conservadores osan rechazar abiertamente, es porque un título universitario sigue siendo, desde que las universidades se crearon, una de las marcas

más reconocibles de prestigio; y porque, en términos generales, un trabajo intelectual –o asimilado a él mediante un título– se paga mejor que un trabajo manual. El destino que espera a la salida es, para la mayoría, esa burocracia pública o privada –llámesele administración, gestión de la *sharing economy*, *marketing*, asesoría legal o financiera– que crece exponencialmente parasitando todo y cualquier actividad-fin que produzca un bien tangible o rinda un servicio concreto a seres concretos.

La Universidad cree –o hace que cree– rendir un servicio a la ciudadanía convirtiéndose en un simulacro de un mundo mejor, más igualitario, más inclusivo. La Universidad como reflejo del mundo, una idea propia de quienes viven tan dentro de ella que la confunden con el todo.

Pero cuando una institución se piensa como un reflejo del todo, pierde de vista el modo en que se articula con él, ignora su función como órgano. Nadie parece acordarse de una función de la Universidad que no sea la de ser redundante, la de parecerse al ideal propuesto para la sociedad: democrática e igualitaria, o productiva y competitiva según los gustos. Y eso por mucho que, lo sabemos muy bien, el valor «progresista» de la ciencia, en un sentido económico o político, siempre ha venido de su diferencia, no de su identificación con la sociedad.

La tierra plana

Un breve rodeo antes de concluir el texto. Los cultivadores de las *hard sciences* se dejaron engañar en algún momento por la misma ilusión óptica que engañó a sus predecesores, los teólogos y filósofos del *ancien régime*: durante casi un siglo y medio, la ciencia parecía ser la dueña incontestable de la verdad. Pero eso duró sólo hasta que empezó a esgrimir conclusiones que contrariaban la sed

de lucro del complejo industrial-financiero –esa nueva Iglesia– que hasta entonces era su decidido patrocinador.

Ocurrió no hace mucho: la tesis del calentamiento global de origen humano reunió pruebas impecablemente objetivas y las presentó ante aquellos poderosos entusiastas de la ciencia. Estos perdieron inmediatamente su entusiasmo, y empezaron a sospechar que tras aquellas tablas y ecuaciones se escondían intereses, construcciones, ficciones –el conservadurismo político descubrió, de repente, el encanto de la crítica posmoderna. No tardó mucho para que el ataque al evolucionismo darwiniano, hasta entonces una guerrilla inocua de maniáticos de la Biblia, empezase también a ganar apoyos políticos. Tiene sentido: el darwinismo, describiendo a los humanos en continuidad con el medio natural, mina la euforia por los negocios ilimitados que pueden hacerse a costa de éste.

Pero la teoría de la tierra plana parece tener otro cariz. Para quien no lo sepa, la tesis de que la tierra es plana –y de que la tierra esférica es una ficción impuesta por una conspiración secular de falsos sabios– ha surgido con fuerza e indiferente a la sorna de muchos, va ganando adeptos en el mundo. Por ahora, no parece ser mucho más que una piedrecilla que se arroja al *establishment* académico sólo para saber si aún tiene capacidad de reacción. La tierra plana, una idea que hace siglos se escogió –o en parte se inventó– como símbolo de la ignorancia crasa de los siglos pretéritos.

La capacidad de reacción parece muy poca. Aquí y allá –especialmente en los Estados Unidos, por supuesto– se realizan congresos para discutir el tema, a veces en los locales y con los presupuestos de la Universidad. No es una anécdota aislada. Es uña y carne con todos esos fenómenos que inquietan desde los titulares de los periódicos: nacional-populismos, anti-intelectualismos, líderes políticos que ascienden en proporción directa a la

inanimidad de su mensaje. La tierra plana, quién lo diría, es contemporánea de la Universidad universalizada, cuya existencia es cada vez más irrelevante a no ser, como ya dijimos, para otorgar títulos, y que al cabo de un largo proceso de ampliación y de complicación se ve cada vez más impotente para difundir mensajes más sustanciosos.

Los partidarios de la tierra plana incluyen, entre sus argumentos, el número de libros y artículos escritos en favor de ella y, claro, las citas que a ellos se hacen: por antigua que parezca su tesis, no es incompatible con modos actuales de gestión y evaluación. Creo estar seguro de que ninguna de esas publicaciones llevan un sello JCR, pero también de que no hay, en el sistema JCR, nada que impida que alguna vez lleguen a estarlo. Es todo cosa de tiempo, y sobre todo de *networking*. No hay, en el sistema de evaluación recién instaurado, ningún punto donde se separe lo científico de lo que no lo es. ¿Debería preocuparnos? En el orden de la civilización moderna, en su orden declarado al menos, la Ciencia consta como un poder, un poder menor, limitado pero independiente: algo que se ha hecho todo lo necesario por erradicar.

Submission

No se puede decir que los profesionales de la academia estén contentos con toda esa situación, mucho menos que la ignoren. En los pasillos de la Universidad no se habla de otra cosa: burocracia estéril, masificación, desinterés, falta de sentido de la profesión y, en general, todos esos inconvenientes aparentemente disparejos que incomodan, aunque, a lo que parece, no se les atribuya ni el carácter sistémico ni el peso apocalíptico que se ha querido mostrar aquí. Sea como sea, se sigue operando en ese sistema, con algo que, si no es verdadero entusiasmo, al menos lo parece.

Hay algunas razones que lo pueden explicar. Una es una especie de nostalgia reversa, la convicción de que, sea cual sea el grado de perversidad de la situación, es preferible a un pasado que siempre tiene unas manos muy sucias, y unas espaldas muy anchas. Los algoritmos nos libertarán de los caciques.

Otra es la convicción de que hablamos del tren de la historia: inútil oponerse. Pero profesores e investigadores no son, o no eran, una masa desorganizada de trabajadores no sindicalizados, sino miembros de un grupo privilegiado que hasta no hace mucho gozaba de un prestigio no muy diferente del que se otorga a lo sagrado. Es ese alto clero el que se ha plegado a un sistema al que una y otra vez podría haberse opuesto sin necesidad de barricadas, con un simple «preferiría no hacerlo» colectivo o, por lo menos, mayoritario.

La población universitaria no parece ser conformista. Los mismos que sobrealimentan dentro los absurdos del sistema, publicando para no perecer o abrazando la burocracia para escapar del caciquismo, parecen muchas veces dedicados a combatir afuera en pro de causas difíciles, muy difíciles. Parece ser un rasgo distintivo de la Universidad actual, esa llamada a cambiar el mundo allá donde se carece del más mínimo poder para hacerlo, mientras no se mueve un dedo en las situaciones donde se dispone de todas las palancas necesarias.

Pero los universitarios no parecen creer ya en su función, aunque sigan creyendo en su diploma y en su cargo: si aquí se predica la tierra plana, si allá se supeditan las cuestiones ambientales –ese lujo– al eterno crecimiento, si acullá se convence a la población de que todos sus problemas se originan en el aflujo de inmigrantes, eso puede molestarles personalmente, pero no lo verán como un problema profesional, mucho menos institucional, ¿qué tiene esta Universidad que ver con eso? Incluso donde existe un movimiento universitario organizado, la pauta de reivindicaciones

nunca o casi nunca hace una mínima referencia al papel que se espera de la Universidad como órgano específico. Se ciñe a sus aspiraciones de crecimiento, a las amenazas de privatización o a las cuestiones salariales; en suma, a todo lo que puede importar a un cuerpo de funcionarios decidido a permanecer y medrar. Ya a respecto de todo lo que sea el valor y el sentido de la actividad científica, sigue valiendo la vieja declaración del canciller de la Universidad de Cervera: lejos de nosotros la peligrosa novedad de discurrir.

O. C. S.

